

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024



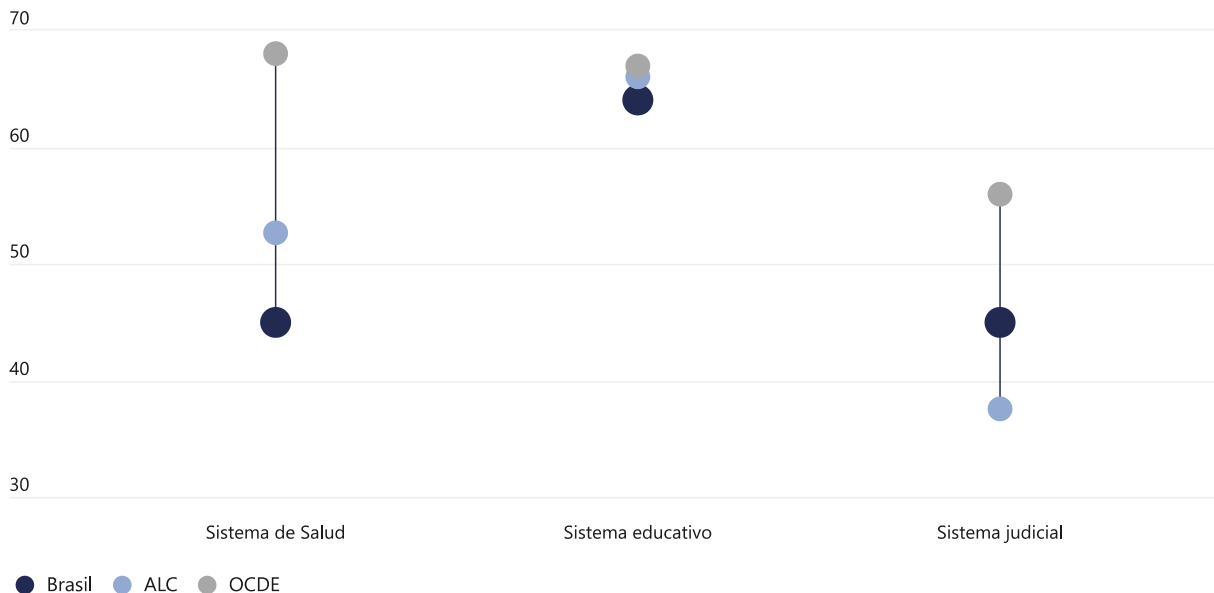
Brasil

Confianza y satisfacción con los servicios públicos

La confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos son resultados importantes de la calidad de la gobernanza pública. Reflejan la percepción que tienen los ciudadanos de la competencia del gobierno en el diseño de políticas públicas y la prestación servicios, así como sus expectativas sobre el comportamiento de las instituciones y los funcionarios públicos. La satisfacción con los servicios públicos y la confianza en las instituciones públicas, aunque no son resultados necesarios de la gobernanza democrática, pueden mejorar la eficacia de la gobernanza fomentando la participación en la vida pública, el cumplimiento de las políticas públicas y la cohesión social.

La gran mayoría de los brasileños está satisfecha con el sistema educativo y la satisfacción con el sistema judicial está por encima del promedio de ALC. Los brasileños están más satisfechos con el sistema educativo, con un 64% de la población satisfecha, ligeramente por debajo del promedio de ALC (66%) y de la OCDE (67%). El sector de salud registra una de satisfacción del 45%, por debajo del promedio de ALC (53%) y significativamente por debajo del promedio de la OCDE (68%). La satisfacción con el sistema judicial es también del 45%, superior al promedio de ALC en 7 puntos porcentuales (p.p.).

Gráfico 1. Satisfacción con los servicios públicos, 2022



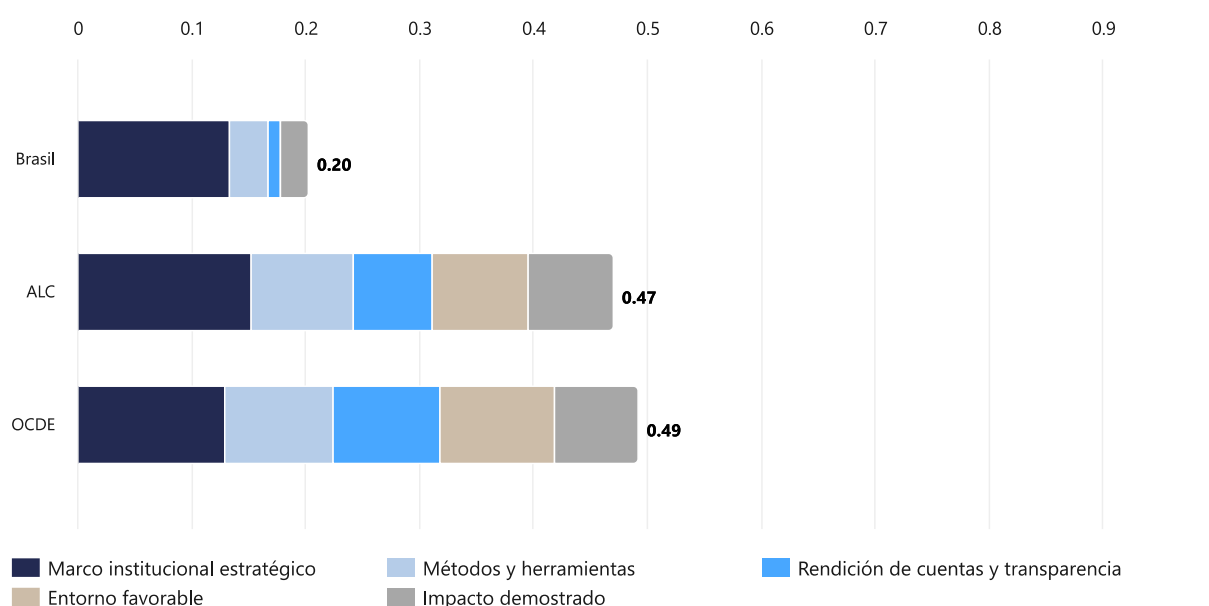
Buena gobernanza para la inclusión y la sostenibilidad

En una época de crisis múltiples, los países de América Latina y el Caribe necesitan adoptar prácticas de buena gobernanza que fomenten la inclusión y la sostenibilidad, elementos cruciales para promover la prosperidad y la resiliencia democrática. Entre las acciones clave están construir sobre las fortalezas de la democracia, incluyendo mejorar la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, así como fomentar la representación y la inclusión en la fuerza laboral pública. Además, los esfuerzos deben centrarse en reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, incluidos los enfoques presupuestarios y de contratación pública que apoyen la transición verde. Asimismo, la protección contra las amenazas a los valores democráticos exige que se mantengan normas eficaces de integridad pública y regulaciones sólidas contra las influencias indebidas.

Los procesos de gestión presupuestaria, como la presupuestación con perspectiva de género, pueden ayudar a promover medidas para cerrar las brechas de género. El Índice de Presupuestación con Enfoque de Género de la OCDE mide el desempeño de los países en cinco dimensiones de los mecanismos de presupuestación con enfoque de género: el marco institucional y estratégico para evaluar el impacto de género de las políticas presupuestarias y fiscales; los métodos y herramientas utilizados para implementar la presupuestación con enfoque de género; los mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; el entorno favorable para la implementación eficaz y coherente del marco presupuestario con enfoque de género; y el impacto de la presupuestación con enfoque de género en el desarrollo de políticas y las decisiones de asignación. De los 13 países de ALC encuestados, 10 practican la presupuestación con enfoque de género (77%), frente al 61% de los países de la OCDE.

Entre los 10 países de ALC que han adoptado la presupuestación con perspectiva de género, Brasil es el que obtiene resultados más bajos en el Índice de Presupuestación con Perspectiva de Género. Obtiene una puntuación de 0.2 en una escala de 0 a 1, inferior al promedio de ALC (0.47) y de la OCDE (0.49). Aunque ha avanzado en el establecimiento del marco institucional y estratégico para la presupuestación con perspectiva de género (lo que se refleja en la puntuación de esta dimensión del índice), hay margen de mejora en todas las demás dimensiones del índice.

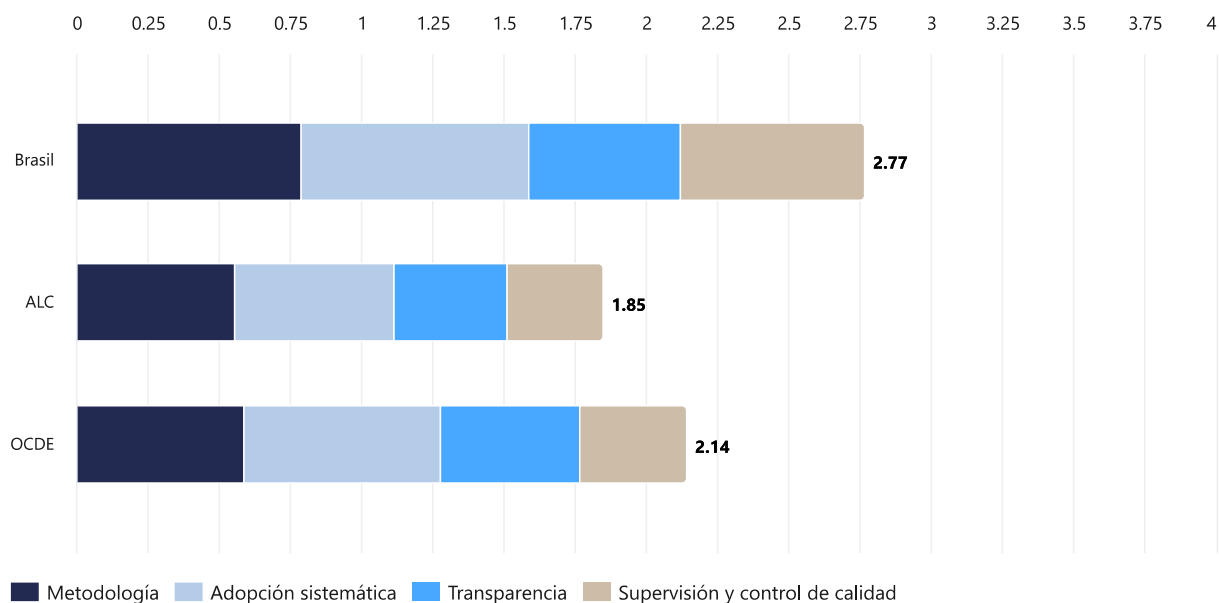
Gráfico 2. Índice de presupuestación con perspectiva de género de la OCDE, 2022



Una participación significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones contribuye a mejorar el diseño y la aceptación pública de las políticas y los servicios públicos. El Índice de Gobernanza y Política Regulatoria (iREG) de la OCDE evalúa la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas (las aprobadas por el jefe de gobierno, los ministerios o el gabinete). Este indicador mide el desempeño de los países en involucrar sistemáticamente a las partes interesadas en la toma de decisiones públicas, el uso de herramientas, la transparencia de sus consultas y su supervisión y control de calidad. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países de ALC encuestados (73%) mejoraron su puntuación iREG en participación de las partes interesadas.

Brasil tiene una de las puntuaciones más altas entre los países de ALC en el índice iREG de participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas. Con una puntuación total de 2.77, en una escala de 0 a 4, Brasil se sitúa por encima de la media de ALC (1.85) y de la OCDE (2.14). Brasil alcanza sus puntuaciones más altas en adopción sistemática (0.8 sobre una puntuación máxima de 1) y metodología (0.79). Todavía hay margen de mejora, sobre todo en la supervisión de la participación de las partes interesadas y el control de calidad, con una puntuación de 0.65, y en la dimensión de transparencia, con una puntuación de 0.53.

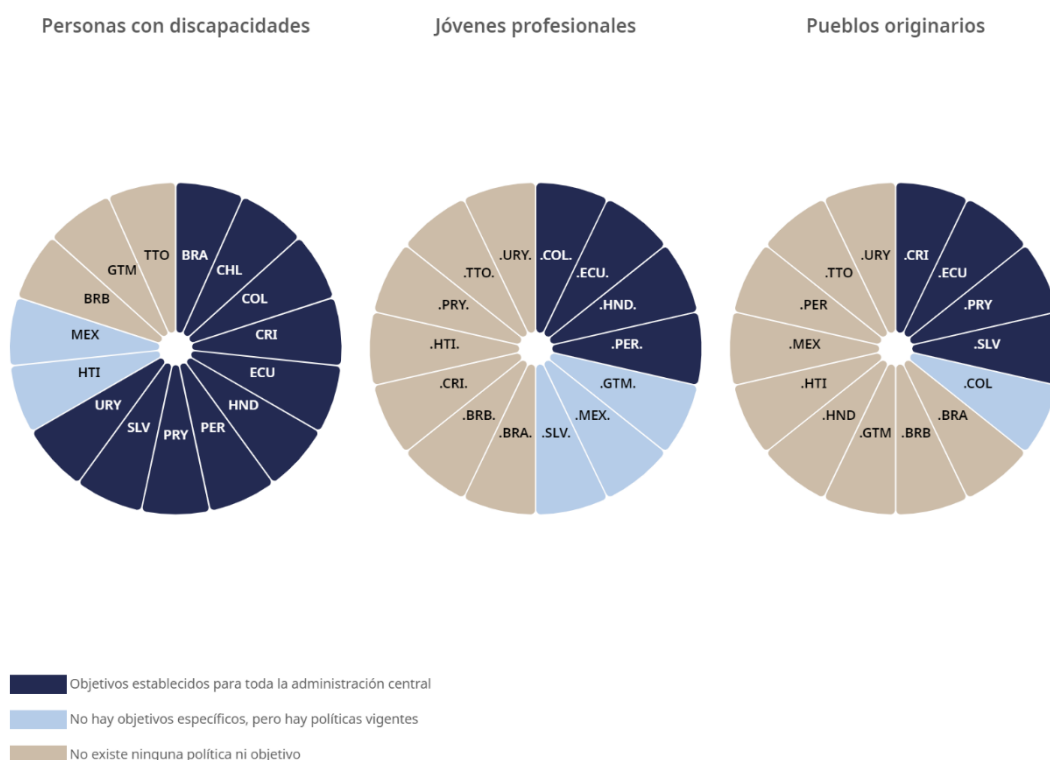
Gráfico 3. iREG sobre la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas, 2022



Una fuerza laboral diversa en el sector público es esencial para promover la representación y la inclusión de los grupos infrarrepresentados y vulnerables. Refuerza el rendimiento del gobierno al impulsar la innovación y contribuir a servicios públicos adaptados a las necesidades de la comunidad. Los gobiernos pueden utilizar políticas y objetivos para contratar y retener a los grupos infrarrepresentados en la fuerza laboral.

Brasil ha establecido objetivos específicos para todo el gobierno federal para la inclusión de las personas con discapacidad en la fuerza laboral pública; mientras que carece de políticas u objetivos para los jóvenes profesionales o para pueblos originarios. En comparación, entre los países de ALC encuestados, 10 de 15 tienen objetivos para las personas con discapacidad, 4 países tienen objetivos para jóvenes profesionales y para pueblos originarios.

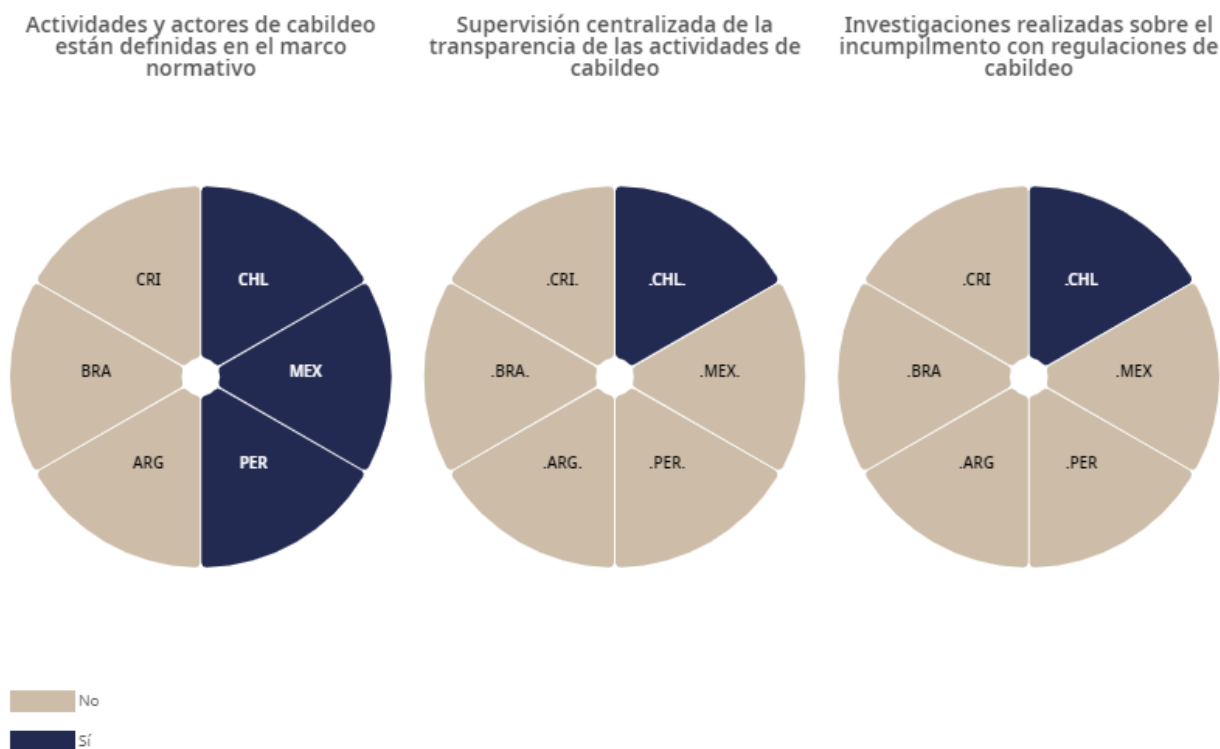
Gráfico 4. Políticas y objetivos para mejorar la representación de grupos específicos en la administración central/federal, 2022



El cabildeo forma parte de la democracia desde hace mucho tiempo, ya que facilita la representación de una serie de intereses y ayuda a identificar el impacto que las políticas tendrán en diversos grupos. Sin embargo, las políticas públicas sufren si las prácticas de cabildeo no son transparentes o no están reguladas, lo que permite a los grupos de interés monopolizar la influencia, manipular la opinión pública, influir en las decisiones gubernamentales y, en última instancia, obstaculizar la aplicación efectiva de las políticas públicas. Para que las regulaciones sobre cabildeo sean eficaces, los gobiernos deben supervisar su cumplimiento e imponer sanciones en caso de infracción. Al año 2022, tres de los seis países de ALC encuestados (50%) regulaban el cabildeo mediante la definición de sus actividades y actores. Sin embargo, la mayoría de los países de ALC carecen de instituciones y marcos regulatorios para supervisar las prácticas de cabildeo y no investigan las infracciones.

Brasil no define las actividades de cabildeo en su marco normativo, lo que hace más difícil impedir que los grupos ejerzan una influencia indebida. Además, no cuenta con un organismo encargado de supervisar la transparencia de las actividades de cabildeo y no ha llevado a cabo ninguna investigación por incumplimiento con las regulaciones de cabildeo en el último año calendario.

Gráfico 5. Regulaciones, supervisión y sanciones sobre cabildeo, 2022



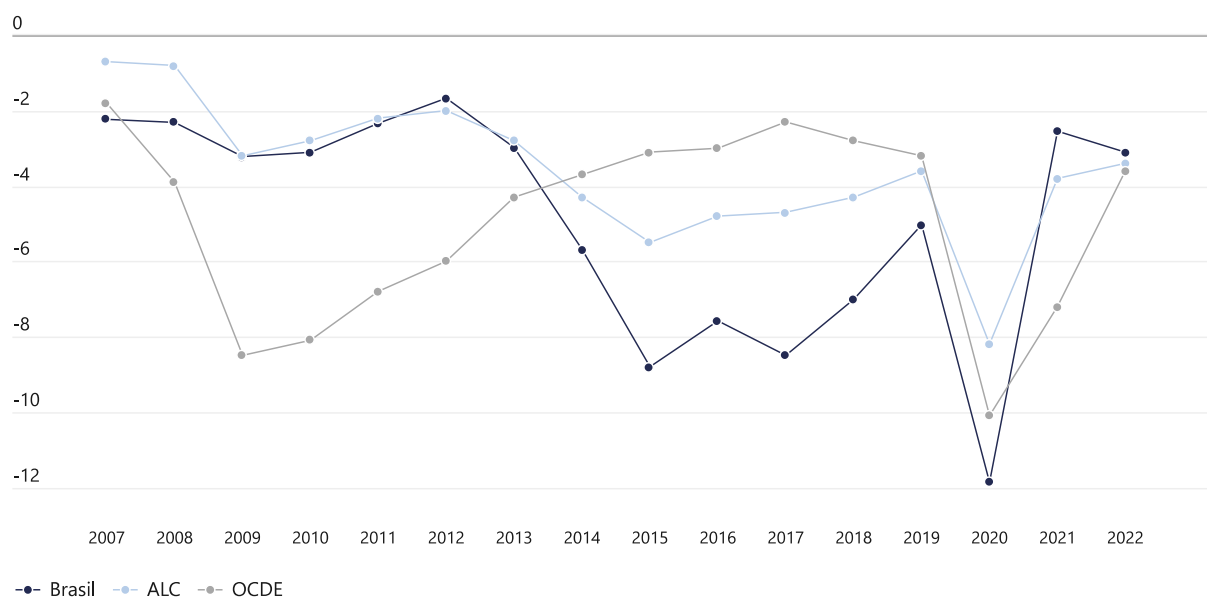
Uso y gestión de los recursos públicos

Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven.

Las finanzas públicas de la región de ALC muestran modestos signos positivos, tras un marcado deterioro en 2020. Este deterioro se debió a las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19, y a las medidas de apoyo a las empresas y a las personas para gestionar su impacto. Para el 2022, los balances fiscales -la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un año- ya se habían recuperado ampliamente a los niveles anteriores a la COVID en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo frágil.

En 2022, Brasil tuvo un déficit fiscal del 3.1% del PIB, menor que el promedio de los países de ALC (3.4%) y se redujo del 5.0% en 2019. Los ingresos del gobierno representaron el 43.3% del PIB de Brasil en 2022, el más alto entre los países de ALC. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB ha aumentado desde el 41.8% en 2019. En comparación, el promedio entre los países de ALC fue del 31.5% en 2022 y del 39.7% en los países de la OCDE.

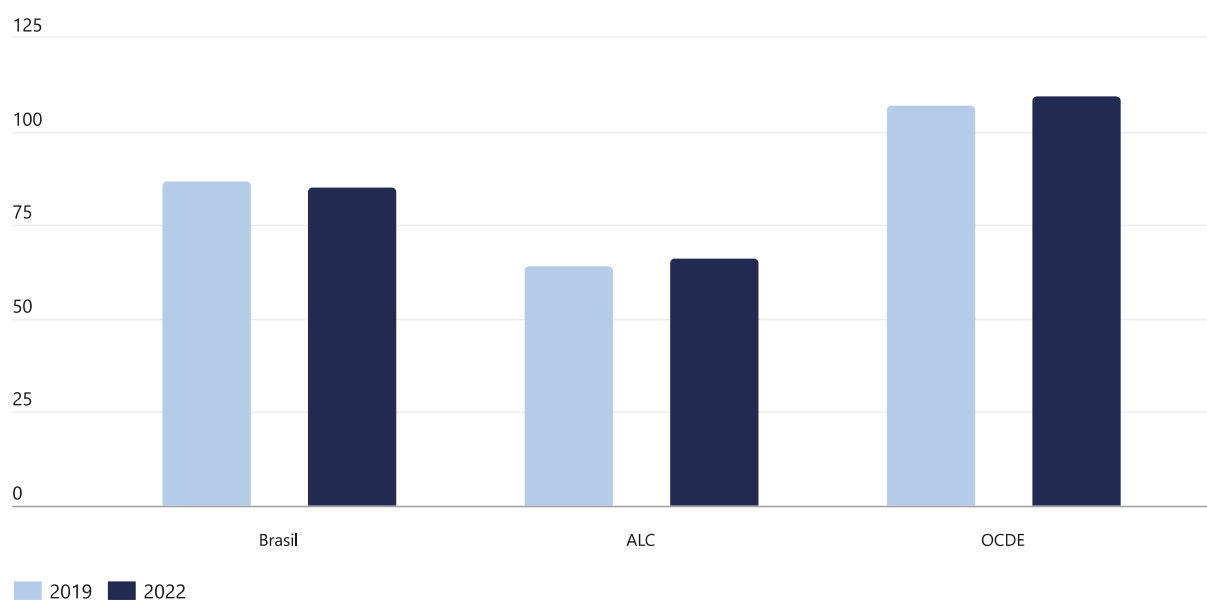
Gráfico 6. Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2007 - 2022



La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto el gasto corriente como las inversiones, pero tiene un costo en forma de pago de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y a la pérdida de ingresos fiscales, y en 2022 aún se mantenía 2 p.p. por encima de su nivel de 2019.

En 2022, la deuda pública de Brasil ascendía al 85.3% de su PIB, por encima del promedio de ALC del 66.3%. El nivel de deuda del país ha descendido desde el 87.1% de 2019.

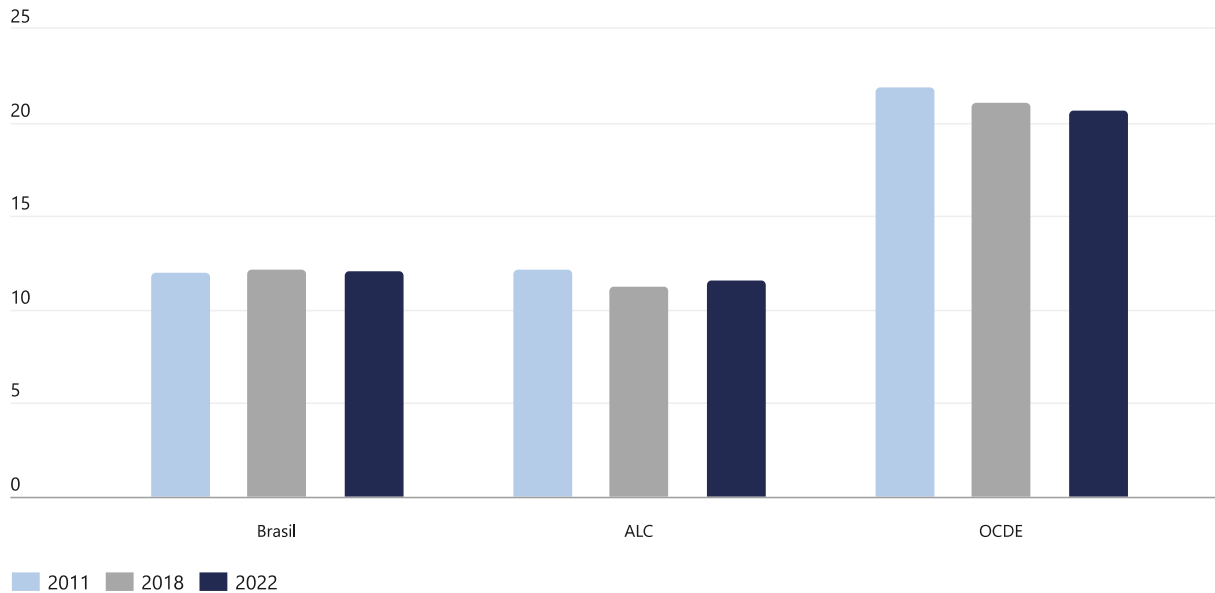
Gráfico 7. Deuda bruta de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022



Los empleados públicos están al frente del diseño y la formulación de políticas públicas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía considerablemente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.

En 2022, el empleo público en Brasil era de 12% del empleo total, igual al promedio de ALC, e inferior al promedio de la OCDE del 21%. El empleo público en Brasil se ha mantenido estable entre 2018 y 2022.

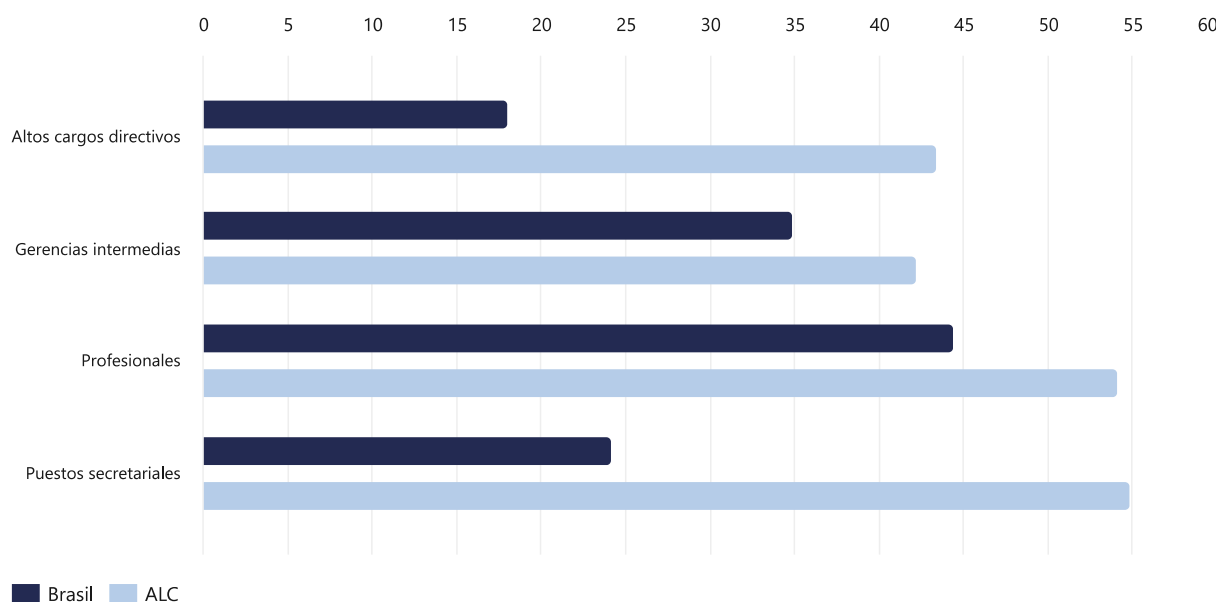
Gráfico 8. Empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022



La representación igualitaria de mujeres y hombres en el sector público es un punto de referencia para medir el progreso hacia la igualdad de género, la diversidad y una mejor representación. En 2021, más de la mitad de los empleados del sector público en los países de ALC eran mujeres (51.5%), con amplias diferencias entre países. Sin embargo, las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los puestos directivos de la región; en promedio, en 2022, las mujeres ocupaban el 43% de los puestos de alta dirección, con diferencias importantes entre países.

La proporción de mujeres en puestos directivos y mandos intermedios del sector público en Brasil está por debajo del promedio de ALC. Las mujeres representan el 55.7% del empleo en el sector público en Brasil, pero sólo ocupan el 18% de los puestos de alta dirección, cifra considerablemente inferior a la media de ALC, que es del 43.4%. En los mandos intermedios, las mujeres ocupan el 34.9% de los puestos, por debajo de la media de ALC del 42.3%.

Gráfico 9. Porcentaje de mujeres por puesto en la administración pública central/federal, 2022



Notas para los gráficos

Los datos sobre finanzas públicas y economía proceden de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del FMI (octubre de 2023), que se basa en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) y se extrajeron el 3 de noviembre de 2023. Para los promedios de la OCDE, los datos se basaron en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y se extrajeron de la base de datos en línea Panorama de las Administraciones Públicas, que representa la última actualización disponible: 5 de enero de 2024.

El balance fiscal, también denominado capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas, se calcula como el total de ingresos públicos menos el total de gastos públicos.

Los datos sobre empleo público proceden de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se extrajeron el 17 de febrero de 2023. Los datos se basan en la Encuesta de Población Activa. El empleo en el sector público abarca el empleo en el sector gubernamental más el empleo en empresas y sociedades residentes de propiedad pública.

Los promedios de ALC y la OCDE se refieren al promedio no ponderado, con la excepción de los indicadores de finanzas públicas.

Para más información, véase www.oecd.org/publication/government-at-a-glance-lac/2024/